

Revista de Derecho

SUMARIO.

Editorial.	<i>Organización del Poder Judicial</i>
Humberto Bianchi V.	<i>La Expresión de Agravios.</i>
Alberto Herrera A.	<i>El Código Civil de Méjico.</i>
Fritz Fleiner.	<i>El Derecho de las Minorías en Suiza.</i>
Juan B. Rubio.	<i>El profesionalismo y la Ley de la Renta.</i>

JURISPRUDENCIA:

Sobre notificación de protestos de Letras,	<i>Sentencia de la I. Corte de Concepción.</i>
Sobre venta de bienes raíces de la mujer casada,	<i>Sentencia de la I. Corte de Concepción</i>
Sobre aplicación del D-L 48 en el caso de Quiebra,	<i>Sentencia de la I. Corte de Concepción.</i>
Sobre prueba en el delito de estafa superior a \$ 200 mediante convención.	<i>Sentencia de la I. Corte de Concepción.</i>

LIBROS Y REVISTAS. LEYES Y. DECRETOS.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION - CHILE

De Don Humberto Bianchi V.

La Expresión de Agravios

EL recurso de apelación tiene por objeto obtener que el tribunal superior respectivo enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior (art. 209 C. de P.º C.).

2.—El conocimiento del asunto, materia del recurso es traspasado, mediante la concesión de la apelación, al juez de segundo grado. Como, originariamente, la jurisdicción de los jueces emanaba del soberano y para ante él se deducía la apelación, se decía que el juez de primer grado *devolvía*, al otorgar el recurso, la jurisdicción delegada que ejercía, a fin de que el monarca pudiera conocer de la cuestión. El tradicionalismo del foro ha conservado la expresión, aun cuando ya se ha olvidado su significado original, y no corresponde desde hace siglos a la realidad actual.

En el estado moderno, dice Chiovenda, la pluralidad de las instancias no puede fundarse en la dependencia del juez inferior con respecto al superior, puesto que no dependen los jueces en cuanto a la aplicación de la ley, sino de la ley misma.

3.—Concedido el recurso de apelación, adquiere jurisdicción el juez de segundo grado, pero su competencia queda limitada a la cuestión que es materia de la alzada, sin perjuicio de

la facultad que la ley le confiere (art. 231 C. de P. C.) para fallar las cuestiones ventiladas en primera instancia y sobre las cuales no se hubiere pronunciado la sentencia apelada por ser incompatibles con lo resuelto en ella, y sin perjuicio también de que pueda hacer de oficio en su sentencia, previa audiencia del ministerio público, las declaraciones que por la ley son obligatorias a los jueces, aun cuando el fallo apelado no las contenga (art. 232).

Si el fallo de segunda instancia se extendiera a un punto no sometido a la decisión del tribunal, incurriría en el vicio de casación en la forma que contempla el N.º 4.º del art. 942 del C. de P. C. Salvo las excepciones legales, el tribunal de segundo grado es incompetente, para conocer de otras materias que las sometidas a su resolución por el recurso, porque no se le ha devuelto jurisdicción sino para eso. *Tantum devolutum quantum appellatum*.

4.—Las partes, dice don Carlos Cofré Meza, en su memoria sobre "Los recursos legales", tienen el derecho de limitar el recurso (de apelación) a determinados puntos, es decir, de entregar al juez de segunda instancia sólo el conocimiento de una parte del litigio, y de conformarse en lo demás con lo que ha resuelto el de primera instancia.

5.—La determinación de los extremos que se someten a la decisión del juez de segundo grado se hace, en los casos que la ley lo ordena, en el escrito de expresión de agravios.

"La jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada a los puntos que les hayan sido sometidos a su conocimiento por medio de la apelación, y tratándose de sentencias definitivas, esos puntos deben quedar establecidos de una manera concreta en la expresión de agravios y en la contestación a ellos", expone la Corte Suprema en la sentencia publicada en la pág. 313 del tomo II de la R. de D. y J.

6.—Tiene lugar este trámite en la apelación de la sentencia definitiva del juicio ordinario (art. 439), y en la apelación de la sentencia definitiva de los demás juicios civiles que, por no estar sometidos a una regla especial diversa, se rigen por las disposiciones del procedimiento ordinario (art. 3.º). Tales son: el juicio arbitral, el de partición de bienes, el de cuentas (cuando se tramita como juicio ordinario), el juicio sobre pago de

La Expresión de Agravios

9

honorarios (en el mismo caso), el juicio de comercio cuya cuantía excede de trescientos pesos, el de hacienda, el de nulidad de matrimonio, el de divorcio perpetuo la acción de desposeimiento, siempre que deba seguirse por los trámites del juicio ordinario y los juicios especiales del contrato de arrendamiento en los casos no contemplados por los arts. 764 y 772.

De acuerdo con el art. 197 del Código de Minería en vigencia, todos los juicios sobre minas que no tengan señalado un procedimiento especial, deben tramitarse y fallarse en conformidad a las reglas del juicio ordinario. Procede, en consecuencia, expresar agravios en la apelación de su sentencia definitiva.

En materia penal, la expresión de agravios procede también en la apelación de la sentencia definitiva (art. 541 y 542 del C. de P. P.) Procede asimismo en la apelación de la sentencia definitiva de los juicios en que se persigue la acción penal privada (arts. 619 y 625).

En la apelación de los fallos dictados por los jueces de letras de menor cuantía, hay lugar a aquel trámite en los mismos casos en que lo habría si la resolución la hubiese pronunciado un juez letrado de mayor cuantía (art. 41 decreto-ley 363, de 17 de marzo de 1925).

7.—En las demás apelaciones no hay expresión de agravios, y el apelante puede fijar los puntos que desea someter a la consideración del tribunal de segunda instancia, ya sea al interponer su recurso, ya con posterioridad.

Si no limita su apelación se entiende que recurre del fallo de primera instancia, en todo cuanto éste pueda agraviarlo porque las renunciaciones no se presumen.

8.—El art. 479 del Código del Trabajo (D. F. L. 178 de 28 de mayo de 1931) dispone que al deducir el recurso de apelación *deberá* el apelante fundarlo someramente, exponiendo las peticiones concretas que formule respecto de la resolución apelada.

9.—El apelante tiene diez días para presentar su escrito de expresión de agravios, el cual deberá contener las peticiones concretas que formule respecto de la sentencia apelada (art. 439). Este trámite es esencial en los casos que ya enumeramos, de manera que su omisión produce el vicio de casación en la

forma contemplado en el N.º 9.º del art. 942 del C. de P. C. en relación con el N.º 2.º del art. 971.

“El trámite de la expresión de agravios, ha dicho la Corte Suprema, es una disposición de orden público, a la cual no puede renunciarse por las partes, porque sin ella faltaría propiamente la demanda de segunda instancia, que no significan otra cosa los agravios, y no habría materia sobre la cual pudiera recaer el fallo”. (R. de D. y J. tomo VIII, pág. 114).

10.—En la legislación española este trámite ha quedado suprimido hace ya tiempo. Don José María Manresa en sus Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil (tomo IV) hace notar que la base 7.ª de las reformas, aprobada por ley de 21 de junio de 1880, suprimió los escritos de alegación de agravios y su contestación, y agrega: “Hoy nada puede alegarse por escrito sobre el fondo de la cuestión que se ventila en la segunda instancia; es oral la defensa, y tiene que reservarse para el acto de la vista la exposición de los hechos y de los fundamentos de derecho en que cada parte apoye sus pretensiones”. “El informe oral sólo puede ser sustituido por la alegación escrita e impresa en el caso del art. 876 (informe en derecho)”.

11.—Mientras llega también para nosotros la feliz situación que a este respecto impera hace ya más de medio siglo en la madre patria, veamos los requisitos que debe llenar el escrito de expresión de agravios.

El art. 439 inc. 3.º del C. de P. C. dispone que la expresión de agravios debe contener las peticiones concretas que formule el apelante respecto de la sentencia apelada.

12.—Pero esto no basta. Cabe aquí recordar que el objeto del examen del juez de segundo grado no es la sentencia de primer grado, sino, el conocimiento íntegro de la cuestión debatida, la relación jurídica controvertida. “Es un hecho, expone Chiovenda, que el juez de apelación examina la sentencia de primer grado y parece que en ella funda su juicio; esto simplifica su trabajo. Sin embargo, en la realidad, el segundo juez, a través de la sentencia de primer grado conoce *ex-novo* del pleito”. “Es un hecho también, agrega, que decidiendo la apelación, usa la fórmula “confirma la sentencia apelada” u otra semejante; pero en el derecho moderno lo cierto es que el juez de segundo grado pronuncia una nueva senten-

La Expresión de Agravios

11

“cia. Sólo por consideraciones prácticas, cuando la resolución del segundo juez es conforme a la del primero, suele presentar el aspecto de una remisión a la primera decisión”.

13.—Téngase también en cuenta lo declarado por la Corte Suprema en el considerando copiado más arriba, y que ha repetido innumerables veces, en el sentido de que la expresión de agravios es propiamente la demanda de segunda instancia, y que ella fija los puntos sobre los cuales debe pronunciarse el tribunal de la apelación.

El escrito de expresión de agravios debe hacerse, pues, en su parte petitoria con el mismo meticoloso cuidado que el libelo de demanda, y formularse en él las correspondientes peticiones sobre los distintos extremos que son objeto de la litis, y que se someten a la resolución del tribunal de segunda instancia.

Habiéndose limitado la alzada en el escrito de expresión de agravios en un juicio de partición, únicamente a las declaraciones contenidas en una cláusula del laudo, sin hacerla extensiva a las operaciones de la ordenata, la Corte Suprema declaró que el tribunal de la apelación no pudo pronunciarse sobre éstas. (R. de D. y J. tomo VI, pág. 117), de donde se desprende que las hijuelas de los comuneros quedaron sin modificación, no obstante las que pudo sufrir el laudo.

14.—Esto sentado, tendremos que llegar a la conclusión de que una solicitud de agravios en que sólo se pide la revocación de la sentencia apelada, sin añadir otra petición sobre las cuestiones mismas debatidas en primera instancia y resueltas por el fallo apelado, no cumple con la ley, por cuanto no somete al tribunal de segundo grado ninguna de las acciones o excepciones resueltas por el juez de la causa en un sentido que el apelante considera injusto, ni somete de nuevo esas cuestiones a la resolución judicial, habilitando al tribunal de alzada para pronunciarse sobre ellas.

15.—En efecto, el tribunal no puede limitarse a decir que revoca la sentencia de primera instancia; debe agregar su decisión sobre las cuestiones que resuelve ese fallo. Así lo ordena el art. 193 del C. de P. C.

La Corte Suprema invalidó de oficio la sentencia de una Corte de Apelaciones, que se limitaba a revocar la de primera instancia. Estimó que no había hecho declaración alguna que reem-

plazara la que contenía la de primera instancia en su parte revocada, "dejando así sin resolver el asunto controvertido e incurriendo en la causal de casación en la forma del N.º 5.º del art. 942 del C. de P. C."; (R. de D. y J. tomo XXVII, pág. 260).

En sentencia de 20 de junio de 1930 (G. de los T. 1930, 1r. sem. pág. 153), declara el Excmo. Tribunal que la expresión "se revoca", no es suficiente por sí sola para significar lo que se resuelve en reemplazo de lo que se rechaza, de manera que necesariamente debe expresarse a la vez, qué es lo que se declara al respecto, sin el cual requisito se incurre en el vicio de falta de decisión del asunto controvertido.

16.—Si se presenta una solicitud de agravios en que no se formule petición concreta sobre la cuestión debatida, y en la que el apelante se limite a solicitar se revoque la sentencia apelada, sin añadir ninguna otra petición, el tribunal de la apelación puede abstenerse de dar curso a ese libelo, o, por lo menos, no conferir traslado de él al apelado, pues no reúne los requisitos de una expresión de agravios.

Si por no creer que le corresponda repelerlo de oficio, o porque no repara oportunamente en la irregularidad indicada, confiere traslado al apelado, a éste le corresponde formular la objeción del caso, y pedir desde luego la deserción del recurso, por no haberse expresado los agravios de acuerdo con la ley (art. 224). Así se procedió en el caso a que se refiere la sentencia de la Corte de Santiago, N.º 161. G. de los T. 1927 segundo semestre, pág. 693.

Cuatro ministros de la Corte Suprema dicen en un voto de minoría de la sentencia que publica la R. de D. y J., tomo XXVII, pág. 468: "Cuando al responder a los agravios mal expresados, la contraria solicita que se declare la deserción del recurso, en razón de que no puede estimarse como legalmente evacuado ese trámite, por no contener las peticiones en orden a los puntos sobre los cuales exige un pronunciamiento, el tribunal *invariablemente* acoge la deserción, y la acoge porque no hay expresión de agravios".

17.—Si el apelado tampoco para atención en la deficiente expresión de agravios de su contendor, y se limita a responder al traslado que se le ha conferido, sin pedir la deserción del re-

La Expresión de Agravios

13

curso, como debiera, el tribunal ordenará traer los autos en relación, en cumplimiento de lo que dispone el art. 440 del C. de P. C. y llegará así el momento de verse la causa, sin que se hayan formulado por el apelante peticiones concretas sobre la materia en litigio.

18.—No sólo vacilante, anarquizada, se muestra la jurisprudencia para resolver el conflicto que en tal caso se presenta.

Tanto en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, como en la Gaceta de los Tribunales corren numerosos fallos que se han pronunciado al respecto.

Con el propósito de contribuir a la dilucidación de esta cuestión, que conceptuamos de interés, hemos clasificado en varios grupos las soluciones que en la práctica se han dado al conflicto.

19.—1.ª solución.—Al imponerse el tribunal, en la vista de la causa, de que en la expresión de agravios el apelante no formula petición concreta sobre ningún extremo del juicio, y se limita a solicitar se revoque la sentencia de primera instancia, *suspende el decreto de autos* y lo demás obrado desde la presentación del libelo de agravios, que no cumple con los requisitos necesarios para que pueda ser tenido como expresión de agravios del apelante, y ordena *de oficio reponer la causa al estado de que se expresen agravios* en forma legal.

Este era el procedimiento que se seguía en la Corte de Apelaciones de Concepción, y el preconizado por la minoría de la Corte Suprema en el voto a que nos referimos en los N.os 16 y 20.

Lo vemos también adoptado por la Corte de La Serena en la sentencia N.º 78 (G. de los T. 1929, 2.º sem. pág. 376). En la especie, se trataba de un proceso criminal por un delito perseguible de oficio, situación que puede influir en el procedimiento. En la vista de la causa observó el tribunal que en la expresión de agravios, que no firmaba el reo apelante sino su procurador, se pedía se confirmara en todas sus partes la sentencia apelada, y por consiguiente, no había habido propiamente expresión de agravios, porque en ésta debió pedirse la reforma de la sentencia en favor del reo. La Corte suspendió los efectos del decreto de autos y de todo lo obrado en la instancia, reponiendo el proceso al estado de que se expresaran agravios por el apelante.

20.—Pero la Excma. Corte Suprema (por mayoría de votos) conociendo de un recurso de queja entablado contra una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, declaró desacertado este procedimiento en la sentencia ya citada (R. de D. y J., tomo XXVII pág. 468), porque los trámites del recurso de apelación interpuesto estaban cumplidos y, por lo tanto, cerrado el debate de la controversia, y el tribunal que intervino en su vista en la obligación de pronunciar sentencia, y porque “la circunstancia de no formularse en los agravios, aparte de la revocación de la sentencia, una petición concreta con respecto a la demanda, no impedía a la sala que intervino en la vista del proceso ejercitar sus facultades de tribunal revisor”.

21.—2.ª solución.— La Corte de Apelaciones de Iquique, en sentencia de 27 de mayo de 1927 (R. de D. y J., tomo XXV, sec. 2.ª, pág. 63, y G. de los T. 1927, primer sem. sent. 69, pág. 341) después de rechazar la indicación previa de uno de sus miembros para suspender el decreto de autos en tanto las partes no pidieran lo conveniente al estado de la causa (es decir, la primera solución), *declaró firme* la sentencia apelada, porque “habiéndose tramitado la expresión de agravios en conformidad a las peticiones del apelante, y no pudiendo el tribunal modificar de oficio el fallo en favor de éste, sin incurrir en el vicio de ultra - petita, no procede sino declararlo firme”.

En igual forma procedieron la Corte de Talca y la de Valdivia en las sentencias que aparecen en la R. de D. y J., tomos XIII y XIV, respectivamente, págs. 495 y 587, y en la G. de los T., año 1914, entrega de nov. y dic., sent. 644, pág. 1873.

La Corte de Valdivia, en sentencia de 4 de diciembre de 1913 (G. de los T. 1913, set. a diciembre, sent. 1130, pág. 3260), *declaró firme* un laudo con respecto a unos apelantes que al expresar agravios no concretaron los puntos sobre los cuales debía recaer la apelación pendiente, “pues no indican la forma en que debe ser modificado el laudo a su respecto, base para el pronunciamiento de la sentencia de segunda instancia”. Esta misma sentencia confirma la de primera instancia con respecto a otros apelantes, pero por evidente error de la publicación, se ha omitido en la Gaceta la expresión usada por el tribunal para hacer la diferencia entre unos y otros recurrentes, y por tal omisión, la sentencia de primera instancia apa-

La Expresión de Agravios

15

rece declarada firme respecto de unos apelantes y confirmada, a la vez.

22.—Pero la Corte Suprema no ha aceptado tampoco este procedimiento, y llamada a conocer de las sentencias dictadas, por las Cortes de Iquique, de Talca y una de las de Valdivia, las ha invalidado. (Véase para la primera la G. de los T. 1928, 1r. sem., pág. 263, y el tomo XXVI de la R. de D. y J., pág. 169 y para las dos últimas los números ya indicados de la R. de D.).

Estima el Excmo. Tribunal en el primero de los fallos aludidos que con este proceder se acepta, de oficio, una deserción no pedida, y agrega que debe el tribunal pronunciarse sobre el recurso elevado a su conocimiento, ya sea confirmando o revocando el fallo de primera instancia.

23.—Es de notar que en la sentencia que hemos citado del tomo XIV de la R. de D., la Excma. Corte expresa en uno de sus considerandos: “Que si no concurrieron en la expresión de agravios los requisitos que en el considerando 1.º se mencionan, si bien por su omisión, el tribunal, por su parte, para dar debido curso a los autos, *pudo ordenar que el trámite necesario de los agravios se llenara con arreglo a la ley,* y que la contraparte, a su vez, pudo hacer uso del derecho que el art. 224 del Código citado establece, no se produjo ninguna de estas circunstancias”.

24.—3.ª solución.— La Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 20 de abril de 1916 “teniendo presente que el apelante no ha formulado en forma legal los agravios que le causa la sentencia apelada”, *confirma* la de primera instancia, después de desechar la indicación previa de uno de sus miembros para suspender los efectos del decreto de autos y se pidiera lo conveniente en orden a la defectuosa expresión de agravios (R. de D. y J., tomo XIV, pág. 134), o sea, después de desechar la primera solución.

En el tomo XXVI de la R. de D. y J., pág. 59, sección 2.ª, aparece una sentencia de la Corte de Valparaíso, fecha 16 de mayo de 1929, en la que también *confirma* la sentencia de primera instancia, en vista de que en la expresión de agravios, después de formularse observaciones y hacerse argumentaciones, se pide “que se revoque la sentencia apelada en la parte que la

“agravia”, y que esa falta u omisión “lleva necesariamente a la conclusión de estimar que no se halla esta Corte en situación de ejercitar sus funciones de tribunal revisor para modificar la sentencia de fjs. porque ello importaría proceder de oficio en un caso en que no está autorizada para hacerlo, razón por la cual no se considera tampoco facultada para poner la causa al estado de que se expresen agravios con arreglo a derecho”.

En una nota puesta por la Revista a esta sentencia se dice que la doctrina consignada en ella guarda absoluta conformidad con el mandato imperativo del artículo 439 del C. de P. C. y ha sido uniformemente establecida en innumerables resoluciones de nuestros tribunales superiores de justicia. (?)

La Corte de Apelaciones de Concepción, en la causa Duhalde con del Solar, adoptó esta misma solución en sentencia de 16 de junio de 1933 y la de Santiago la contempla como única solución legal en la sent. 69 G. de los T., 1.er sem. 1931, pág. 299.

25.—La primera de las sentencias de este grupo a que nos hemos referido, esto es, la de 20 de abril de 1916, dictada por la Corte de Santiago, fué invalidada por la Corte Suprema (R. de D. y J., tomo y pág. citados), porque no concurriendo en la expresión de agravios los requisitos legales “no procede en derecho tener como evacuado ese trámite, y por su omisión, el art. 224 del C. de P. C. da derecho al apelado para que pida que se declare desierta la apelación, pero en ningún caso la ley autoriza al tribunal de alzada para que, haciéndose cargo del defecto u omisión referidos y desentendiéndose del trámite legal respectivo, se pronuncie sobre la resolución apelada, sirviéndole como de único antecedente para confirmarla, precisamente la existencia de aquel defecto”.

26.—4.ª solución.— En ocasiones la redacción de la expresión de agravios es defectuosa, pero, si puede entenderse que en ella se contiene alguna petición concreta del apelante, los tribunales han acogido esa petición, no obstante la deficiencia de la redacción. El fundamento de este proceder lo encontramos en la sentencia que se publica en el tomo XXV, pág. 401 de la R. de D. y J. Allí la Excm. Corte Suprema dice: “Que el escrito de expresión de agravios cumple con lo que prescribe el art. 439 del C. de P. C. pues en él se pide... Que si

La Expresión de Agravios

17

“ bien es cierto que estas peticiones concretas no se consignan
“ con toda claridad en la conclusión de aquel escrito, sino en
“ el cuerpo del mismo, también lo es que el C. de P. C. no
“ prescribe para el de expresión de agravios la regla que para
“ los escritos de demanda y contestación establece en sus arts.
“ 251 y 299 en orden a que se enuncien precisa y claramente
“ en la conclusión las peticiones que se someten al fallo del tri-
“ bunal”.

En la sentencia que aparece en el tomo XXVII de la misma Revista, pág. 137, dijo el Excmo. Tribunal: “Que en el escrito de expresión de agravios la parte apelante, después de especificar los cargos desestimados por la sentencia de primera instancia, y de exponer, en cada caso, las razones a virtud de las cuales han debido ser aceptados, termina formulando petición para que se revoque la sentencia en alzada, en cuanto no ha lugar a los cargos hechos a la cuenta; que en esta forma se ha cumplido debidamente el precepto del art. 439 del C. de P. C.”.

En la citada Revista, tomo V, pág. 157, corre una sentencia en que la Corte Suprema, refiriéndose a una expresión de agravios que se limitaba a pedir la revocación de la sentencia de primera instancia, dijo, después de estudiar el caso en cuestión, que “los agravios tenían por objeto claramente pedir la modificación de la sentencia en esta parte (la única que consideraba apelada)”.

En el tomo IX, pág. 516 de dicha Revista, se lee un fallo del Supremo Tribunal en que aparece el siguiente considerando: “ Al pedir la demandada en su escrito la revocación de la sentencia apelada y su consiguiente absolución de la demanda, *comprendió virtualmente y de facto* en dicha solicitud, la prescripción alegada en apoyo y como fundamento de su defensa (en primera instancia)”.

La Corte de Concepción, en la causa de Mella con Roa (Registro de 1931, pág. 1121), establece que del conjunto del escrito de expresión de agravios se desprende, con toda claridad, cuál es la petición concreta que hace el apelante, no obstante que la parte petitoria se limita a solicitar la revocación de la sentencia de primera instancia.

La misma Corte en la causa Quiebra Salamé (Registro de

1931, pág. 1223), interpretó también en análogo sentido una expresión de agravios que no era del todo clara.

27.—Pero este procedimiento sólo puede seguirse cuando no hay duda de que el apelante formula alguna petición concreta en su escrito de agravios.

Por eso, la Corte Suprema dijo en la sentencia publicada en la R. de D. y J., tomo VIII, pág. 57: "Que el recurrente, si bien en el exordio del escrito de expresión de agravios hizo observaciones a la parte de la sentencia de primera instancia que le impuso medidas disciplinarias, no formuló en la conclusión de este escrito petición concreta al respecto, limitándose a pedir que se revocara la sentencia apelada, declarándose sin lugar la demanda, y aceptándose la reconvención; que suponiéndose que fuera procedente la casación por este capítulo, el fallo *quedó firme* con arreglo a lo prescrito en el art. 197 del C. de P. C."

En análogo sentido se pronuncia aquel tribunal en la sentencia que aparece en la R. de D. y J., tomo XI, pág. 94. La Corte de Valdivia, revocando un fallo de primera instancia, negó lugar a una demanda, después de desechada la indicación previa de dos de sus miembros para declarar firme la sentencia apelada por no llenar la expresión de agravios los requisitos legales (segunda solución). Interpuesto recurso de casación en la forma contra esta sentencia por haber sido dada *ultra - petita*, la Corte Suprema acogió el recurso porque "para que pueda el tribunal de segunda instancia ejercitar sus facultades de tribunal revisor, ya que la ley le prohíbe proceder de oficio, salvo en los casos en que haya sido expresamente autorizado para ello, necesita en absoluto que la parte que pretende se modifique en su favor una sentencia definitiva de primera instancia, indique concretamente en qué sentido debe modificarse el fallo reclamado, y *cuál es la resolución que solicita se dicte en su reemplazo*; que en el escrito de expresión de agravios... sólo se limita el apelante a solicitar que se la revoque (la sentencia apelada), a virtud de las consideraciones que al efecto expresa; que, en consecuencia la Corte sentenciadora al negar lugar a la demanda, sin que tal cosa se hubiera pedido expresamente por el apelante en su escrito de

La Expresión de Agravios

19

“ expresión de agravios, extendió su fallo a puntos no sometidos legalmente a su decisión”...

28.—En el escrito de expresión de agravios pueden oponerse las excepciones de prescripción, cosa juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda, cuando ésta se funde en un antecedente escrito, excepciones que el art. 300 del C. de P. C. autoriza para deducir en cualquier estado de la causa.

Una excepción de otra clase que las ya indicadas que se formulen por primera vez en la expresión de agravios no puede ser objeto del fallo definitivo (R. de D. y J., tomo IV, pág. 152).

En este mismo sentido hay numerosas sentencias dictadas por la Corte Suprema, entre las que pueden verse las que corren en la R. de D. y J., tomo VIII, pág. 38 y tomo VII, pág. 310.

29.— El apelado puede adherirse a la apelación al responder a los agravios (443) y, en ese caso, su respuesta es, a la vez, expresión de agravios de su parte.

CONCLUSIÓN

30.— Este trabajo ha tenido por objeto llamar la atención de los abogados a la importancia del escrito de expresión de agravios, que es, como muy acertadamente se ha dicho, la demanda de segunda instancia, y debe merecer en su parte petitoria del abogado defensor el mismo cuidado que ésta.

A su vez, la defensa del apelado está obligada a pedir la deserción del recurso, en el caso de que la expresión de agravios no cumpla con la exigencia de la ley.

Si por negligencia de unos y otros, e inadvertencia del tribunal, llega el momento de verse la causa sin que exista solicitud de agravios con petición concreta sometida al fallo de la Corte, el estudio de los principios que en esta parte rigen la apelación, y la aplicación de los preceptos de la ley, llevan a la solución que tal conflicto puede tener.

HUMBERTO BIANCHI V.,
Profesor de Derecho Procesal.